

**XXVI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES
BALANCE DE LA REFORMA ELECTORAL 2014
SOMEE 2015**

**La Política Social como Instrumento de Control de la Participación
Ciudadana**
Una Herencia Autoritaria.

PRESENTA:

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
vic_hugo8@hotmail.com / 130231.vhrm@gmail.com

Foro XI: Contenidos Culturales de la Participación Ciudadana

Palabras clave: Participación, política social, control, sistema político.

septiembre 2015.

La Política Social como Instrumento de Control de la Participación Ciudadana:

Una Herencia Autoritaria

RESUMEN: Durante más de 70 años, nuestro país en el siglo XX, vivió bajo un régimen político autoritario que logró cierta estabilidad social, con base en la restricción de libertades individuales; este sistema, sustentó gran parte de su poder en un partido hegemónico oficial que lograba la asociación de ciudadanos en modelos corporativistas que aseguraban respaldo y obediencia al sistema, a cambio de beneficios tangibles e intangibles de corto alcance. En este contexto, y con la presencia de algunos movimientos sociales contrarios a los intereses gubernamentales, se va configurando un tipo específico de participación o movilización ciudadana, con la que hoy contamos todavía, si no completamente, si con muchos rasgos heredados de dicho régimen. A partir de la Revolución de 1910 se establecen los instrumentos jurídicos que regulan nuestras relaciones tanto internas como externas, sin embargo, el sistema político va generando sus propias reglas, algunas incluso, llamadas “meta constitucionales”; y es en estas reglas alternas que el ciudadano mexicano va tejiendo sus características, confeccionando sus particularidades y delineando su papel con respecto al Estado y la forma en la que se involucra en los asuntos públicos, es decir, la manera en la que participa. En tal sentido, la política social diseñada, operada e instrumentada por las instituciones gubernamentales, ha promovido o inhibido la organización de diversos sectores y grupos de la población en aras de encontrar respaldo hacia ciertas acciones, legitimar posturas convenientes o justificar su inacción en ciertos temas sociales.

Introducción

El Estado, como aparato rector y regulador de muchos de los aspectos de la vida social, económica, cultural y eminentemente política de una nación, emprende acciones a través de sus órganos e instituciones para establecer canales de comunicación con la sociedad, en este sentido, la política social permite al propio Estado generar parámetros que promuevan una participación activa de la comunidad, ya sea para recibir un programa específico, para corregir un problema común, superar una carencia o generar acciones de solidaridad y reciprocidad entre la propia población. Sin embargo, la política social, también puede inhibir la organización de la gente y por ende su participación en la vida pública, derivando en un ciudadano apático, desinformado y desinteresado por participar en la solución de los problemas sociales, delegándole al Estado toda responsabilidad en materia de bienestar social; considerando que su única participación debe ser electoral y esperando que el aparato estatal resuelva todos los demás asuntos de la colectividad, sin ser importunado.

Aunado a lo anterior y derivado del desmantelamiento del Estado de Bienestar o en el caso mexicano al menos, del abandono de la universalización de los programas sociales dando paso a la focalización de estos, además de la crisis del modelo neoliberal, y ante la creciente necesidad de contar con un aparato estatal con amplia legitimidad, resulta de suma importancia conocer y comprender qué acciones emprende el Estado para promover la participación ciudadana, en este caso, a través de la política social. Pues es sólo mediante la participación ciudadana, que se contará con el respaldo suficiente para enfrentar con éxito los retos cada vez más complejos, de sociedades cada vez más complejas.

En tal sentido, la política social puesta en acción dará muestras de qué tendencias o modelos ideológicos promueve un Estado para generar cohesión y participación; conocer esto, permitirá comprender mejor el ámbito en que se mueven y despliegan las políticas públicas encaminadas al desarrollo social.

Para ello, se abordarán en las presentes páginas tres apartados: a) *Reconociendo el escenario*, donde se presentan los referentes conceptuales y su relación directa e indirecta con el punto central de este trabajo; b) Breve revisión histórica de las formas y aparatos utilizados para el control de la participación, donde se reconocen elementos del sistema político posrevolucionario que delinearon

actitudes, prácticas, discursos, controles, etcétera, de la sociedad, en especial de sus formas de participación; y, c) Conclusiones, donde se presenta sintetizadamente una abstracción de estos elementos imbricados en la participación ciudadana.

Reconociendo el Escenario.

El discurso político en torno a la política social, en este país, ha generado un contexto donde algunas dádivas o paliativos a ciertos problemas, como la pobreza, la desigualdad, entre otros, sean concebidos como instrumentos del “desarrollo social”, sin ser más que, únicamente, acciones inacabadas y de corto alcance, que a lo sumo, representan esquemas de asistencialismo con los objetivos de presentar un escenario de aparente interés gubernamental por resolver los grandes problemas sociales y de legitimar el uso de los recursos públicos.

En un sentido similar, la participación ciudadana es preconcebida en nuestro país con arreglo a modelos procedimentales de democracia, que están fuertemente ligados a las cuestiones de sufragio y donde el ciudadano queda inmerso en escenarios de calendarios electorales, casi exclusivamente.

Dejando claro estas partes, se puede proceder a plantear conceptualmente los referentes que nos permitan esbozar la influencia del Estado en el control de la participación ciudadana; y así, observar cuál ha sido la herencia cultural que mantiene nuestra sociedad en lo referente a sus formas de organización social y de participación.

Parafraseando unas palabras introductorias al trabajo del Dr. Mauricio Merino, en torno a la *“Participación Ciudadana en la Democracia”* (1995), se resumió la idea de que existe una relación indisoluble entre democracia y participación ciudadana, y que precisamente la construcción de la primera, no es tarea única y exclusiva de los gobiernos o de los partidos políticos, sino también y de manera muy destacada de los ciudadanos, puesto que su participación voluntaria y responsable, son condiciones imprescindibles para los regímenes democráticos. Sin embargo, es necesario problematizar en las características particulares de la democracia en la que vivimos y por ende, en las particularidades de la participación que observamos en los mexicanos.

Continuando con las ideas del Dr. Merino, su texto hace referencia a que la palabra “participación”, cuenta con una connotación o sentido bueno y valorado, es decir con una carga axiológica positiva que remite, en palabras textuales del Dr., a “...tomar parte... o también significa compartir...”, (Merino, 1995; 9). En tal sentido, es interesante considerar la posibilidad de que si el aparato estatal controla la participación ciudadana, mediante la política social u otros esquemas, estaría controlando una actividad que trae consigo cosas buenas para la vida en comunidad, sin embargo, qué mueve a dicho aparato a influir en la participación o tratar de hacerlo, es la pregunta que aparece naturalmente al reflexionar en este tema, puesto que las primeras respuestas pueden ser variadas y de distintos tipos, por ejemplo: legitimar su actuación política y mantener el ejercicio del poder público; fortalecer la inclusión de la sociedad en las políticas públicas, en aras de formar una agenda de control compartido; para crear una imagen de un país democrático, acorde con las exigencias discursivas internacionales; para generar lazos de solidaridad y cohesión social; entre otras.

Es necesario en este punto, establecer que no se alude a otras formas de participación ciudadana, aquellas que no están reguladas, promovidas o controladas por el Estado, pues existen las formas libres y espontáneas que surgen del ejercicio pleno de la ciudadanía y que no son el resultado directo de acciones de gobierno como la política social. Cabe la abstracción que realiza María Teresa Villareal Martínez, en relación a los planteamientos de Alicia Ziccardi, donde, “...indica que la participación ciudadana puede ser institucionalizada o autónoma. La primera es la que está contenida en el marco legal y normativo. Y la autónoma es aquella que no es organizada desde las instituciones gubernamentales sino desde la propia sociedad.” (www.cee-nl.org.mx).

Así mismo, también existen diversos tipos de participación, no sólo la que nombramos como “ciudadana”, que implican distintos rangos y niveles de actuación, así como diversos vínculos entre los propios individuos; la Dra. Villareal utiliza en su trabajo la siguiente clasificación:

- *Participación social es la que se da en razón de la pertenencia del individuo a asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes, y el interlocutor principal no es el Estado sino otras instituciones sociales.*
- *Participación comunitaria es el involucramiento de individuos en la acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las necesidades de sus miembros y asegurar la reproducción social; suele identificarse con la beneficencia. El interlocutor principal de estas acciones no es el Estado y, en todo caso, lo que se espera de él es recibir apoyo asistencial.*

- *Participación política tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones formales y mecanismos del sistema político: partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones. Es una participación mediada por los mecanismos de la representación política.*
- *Participación ciudadana es aquella en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas. (www.cee-nl.org.mx).*

En qué vertiente participa el ciudadano y con qué fines específicos, es decir qué motivaciones existen para decidir inmiscuirse en los asuntos públicos o simplemente retraerse de vincularse con sus conciudadanos y tomar parte en un asunto de interés general, es precisamente la pauta para acercarse a una explicación, de cómo es que se utiliza la política social para encausar la participación del ciudadano¹.

Hablando de participación ciudadana, es inherente, en términos de Pineda Pablos (1999), que desde el enfoque liberal, el gobierno está sujeto al control, escrutinio y juicio de los ciudadanos y sus decisiones, y los proyectos políticos deben de ser sometidos al consenso y aprobación de la representación y la participación de los propios ciudadanos; sin embargo, parece contrario a lo que sucede en nuestro país, considerando los arreglos del sistema político con los procesos de corporativización y formación de clientelas.

La participación ciudadana es entendida en este caso [desde el enfoque liberal] como las actividades regales (sic), iniciadas por los individuos dentro de la sociedad orientadas a influir tanto en la selección de las autoridades como a consensar las decisiones que estás toman y evaluar los resultados de la gestión pública. (Almond y Verba citados por Pineda, 1999; 2).

¹ Sólo de manera enunciativa, puesto que no es tema central de este trabajo, se percibe como evidente que al hablar de participación ciudadana, se da por sentado que existen sujetos que ostentan plenamente dicha condición de ciudadanía, desde cualquiera de sus enfoques; sin embargo, en nuestro país mucho se ha discutido sobre qué tipo de ciudadano existe y cuáles son los derechos que tiene asegurados y por tanto a los que accede de manera fluida y cotidiana; con base en la triada propuesta por T. H. Marshall, principalmente (derechos civiles, políticos y sociales), y más aún, qué decir de los derechos de nueva generación, llamados culturales, lo que complica más el análisis a la hora de tratar de definir el tipo de ciudadano que tenemos en este país.

No se trata únicamente de que el aparato estatal defina, oriente, coordine y dirija la participación, sino, como señala la cita anterior, se trata de establecer canales de comunicación que permitan a los ciudadanos participar en la toma de decisiones, así como evaluar dichas decisiones; es de esta forma, que se refuerza la idea de: *“La participación ciudadana está entonces estrechamente vinculada al sistema electoral como mecanismo de consulta, y comprende además las actividades de opinión, voz y voto, así como la libre asociación, el referéndum y la iniciativa o solicitud pública”* (Pineda, 1999).

Parecería, por tanto, que hablar de participación ciudadana implica de manera natural una relación con apego a esquemas de amplia influencia mutua, donde los ciudadanos tienen la capacidad de revertir decisiones tomadas por el gobierno, lo que en nuestro contexto, parece ser más la excepción y no la regla². De igual manera, como se menciona desde el principio de este trabajo, el voto parece ser la herramienta más viable para representar la voluntad ciudadana³, pero como también ya se ha mencionado, esto sólo es una forma procedimental de corto alcance, pues el ejercicio del poder público, implica decisiones en la vida cotidiana y no sólo en época electoral.

Dentro de este tenor de ideas, se cruza la siguiente variable para acercarse a la cuestión del control que realiza el Estado a la participación ciudadana, y que es, la “policía social”. A esta, la podemos definir con base en el planteamiento de Ander Egg (1990), como un instrumento para realizar políticas públicas con el propósito de obtener bienestar social; y a su vez, dicho bienestar social, entenderlo como el fin u objetivo último de la política social.

En tal sentido, entender el propio concepto de “bienestar” y más aún, “bienestar social” conllevaría retomar múltiples variables que brindaran un criterio certero para designar tal estadio o condición, por tanto, se ha de utilizar la misma línea de Ander Egg, para definirlo: *“...conglomerado jurídico que respalda las acciones, los beneficios y los servicios que establece el poder público, para proveer y/o producir todo lo que se considera necesidades básicas para el bienestar o mejoramiento social”* (Ander, 1990, 4).

² Para el gobierno mexicano la participación según la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 3º, fracción V, se entiende como: *“Participación Social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social”*. (LGDS, 2002).

³ Igualmente, sólo de manera enunciativa, puesto que no es la categoría de análisis principal de este trabajo, entenderemos a la ciudadanía como: *“... un grupo de prácticas culturales, simbólicas y económicas; así como el conjunto de obligaciones y derechos de carácter legal, político y social que definen a un individuo en relación con el Estado”* (Isin, citado por Tejera, 2006; 42)

La política social como mecanismo del Estado para generar ese bienestar o para la satisfacción de necesidades básicas, o para el mejoramiento social, desde el punto que se le vea, representa una oportunidad singular para promover la participación ciudadana, para acercarse a la población y encauzar sus esquemas de organización y por tanto, sus formas de participación.

Pero la política social como tal, es concebida también con dos formas distintas de protección o aseguramiento de satisfactores mínimos para la población; la seguridad social y la asistencia social.

La primera asocia los beneficios sociales en torno al salario y a la condición laboral, está cimentada sobre las aportaciones del trabajador y brinda protección en función de las relaciones derivadas del empleo y del propio salario⁴, es decir que una persona al contar con su fuerza de trabajo, y al lograr insertarse en el mercado laboral, cuenta además con la redistribución que el Estado realizará a favor de su bienestar.

Por su parte la asistencia social no se encuentra relacionada con la aportación a un fondo; más bien, se muestra como una forma de intervención estatal destinada a brindar protección social a grupos vulnerables y sectores de la población que no cuentan con los ingresos y recursos que aseguren su subsistencia, y que tampoco son cubiertos por esquemas de seguridad social. Es así que el Estado puede asegurar un mínimo de satisfactores básicos para aquellas personas que por muy diversas razones no cuentan con la posibilidad de hacerse llegar de dichos satisfactores (grupos vulnerables). Esta concepción está orientada o debiera estar orientada por la universalidad de los Derechos Humanos (Guadarrama; 2001, 42-43).

En un esquema democrático, presuponiendo cierta igualdad entre los individuos, tanto el Estado como la Sociedad Civil, deben encontrar los caminos correctos de cooperación y coordinación a fin de que la implementación de una política social no pierda su esencia y coadyuve a garantizar niveles mínimos de bienestar, con la consigna permanente de elevar continuamente la calidad de vida de las personas (principalmente de aquellas que se encuentran en situaciones de desventaja dentro de la sociedad), pues un esquema reduccionista sólo se conduciría a que la gente tenga lo mínimo de lo mínimo que apenas alcance para cubrir indicadores, sin buscar realmente una mejoría constante en los satisfactores individuales que permiten ampliar el nivel de calidad en la vida de las

⁴ El ejemplo más esclarecedor es el servicio de salud, el derechohabiente de las instituciones públicas, que con base en sus aportaciones obtiene un sistema que procura por su salud.

personas; además de abatir los desequilibrios generados por los esquemas económicos y sociales imperantes, sin perder de vista el apego al respeto de los derechos sociales e individuales.

Imprescindible resulta también el mencionar, que la política social, no puede confundirse con la caridad, la beneficencia o la filantropía, pues son conceptos que tienen un origen, a la vez que un fin distinto: *“La caridad tiene un origen netamente religioso, es voluntaria y es preferentemente individualista. La beneficencia se realiza de manera colectiva y organizada, y puede ser llevada a cabo por organizaciones tanto públicas, como privadas. Respecto a la filantropía puede decirse que tiene un origen más humanista que religioso, en el fondo la filantropía responde más al interés del que ayuda, que al de los receptores de la ayuda”* (Sobrino, 1995; 29).

La cita anterior deja claro que la política social instrumentada por un Estado, en este caso el Estado mexicano, no puede ni debe por ningún motivo, confundirse o vincularse a otros esquemas como la caridad o la beneficencia, más bien, debe ser el resultado de un análisis estratégico de los problemas estructurales del modelo económico, político, social y cultural, imperante y revertir o solucionar las desigualdades o brechas generadas por dicho sistema. En el siglo XXI, deberíamos ya tener bastante esclarecido que el problema de la pobreza no es exclusivamente responsabilidad de cada individuo, mucho menos, responsabilidad de un orden supremo de corte celestial, sin embargo, algunos de los esquemas paternalistas de las instituciones gubernamentales, crean en el imaginario colectivo la idea de que los apoyos o transferencias que se realizan a través de la llamada política social, son generados por la buena voluntad del titular o encargado de alguna dependencia

Bajo esta línea, podemos reconocer que dentro de los escenarios intervencionistas del Estado mexicano, surgieron diversas instituciones encaminadas a controlar cada vez más las formas de organización de la sociedad, con apego a esquemas burocráticos jerarquizados cada vez más rígidos y que establecían órdenes corporativos y clientelares.

Así, durante varios años el punto central del bienestar reflejado en la política social, serán los trabajadores asalariados, a través de una legislación laboral y sistemas públicos de salud y educación, excluyendo así de la política social a un numeroso sector de la población que no contaba con un empleo dentro de la actividad formal, como los campesinos, los indígenas, comerciantes, etc.; pero como veremos, a dichos grupos se les da cabida en otros esquemas de asistencialismo que permiten su cooptación y control, y por tanto un manejo político electoral de los mismos.

Es importante resaltar que casi todas las acciones llevadas a cabo con el sello de política social estaban (siguen estando considerablemente), íntimamente relacionadas con cuestiones político partidistas, pues las prácticas corporativas eran las que daban el sustento al régimen político autoritario imperante en nuestra sociedad. En este sentido durante la mayor parte del siglo XX, el partido hegemónico jugaba un papel relevante dentro del sistema, puesto que su tarea era también mantener la estabilidad política dentro de la población. "... en la década de los cuarenta, se inaugura el sistema político o una forma de dominación política, que borra el concepto de "clase" del lenguaje de la revolución y lo sustituye por el de "sector" bajo la intuición del partido único heredero exclusivo de las demandas populares manifestadas en la revolución" (Bolívar, 1996: 116-117).

A saber, el sistema político mexicano, con sus respectivos aparatos e instituciones, supo y ha sabido encontrar los causes que le permitan la cooptación de amplios grupos de la población, de las demandas ciudadanas legítimamente construidas y de las formas de participación social, a fin de encausar estas, en votos que le permitan el control del ejercicio público.

Asimismo, la política social como institución del Estado Interventor Mexicano, tanto en su vertiente de la seguridad social, como en el de la asistencia social, fomentan el desarrollo de un sistema de ciudadanía con características muy particulares, regulada por el Estado.

Dando paso a esquemas de control político donde los ciudadanos parecen ser, simples espectadores lejanos de los arreglos que la clase política realiza en aras de repartir el poder y hacer que la población tenga un aparente bienestar social.

Breve Revisión Histórica de las Formas y Aparatos Utilizados para el Control de la Participación

Si bien es cierto, como sostiene este trabajo, que la política social ha sido un esquema utilizado para controlar la participación ciudadana, preferentemente encausándola reduccionistamente, a cuestiones electorales, esto no podría ser posible sin el uso de otros instrumentos o aparatos institucionales que den soporte a las acciones emprendidas por la política social; y que además se han ido construyendo y afianzando a lo largo de la historia de nuestro país. Así, se distinguen tres escenarios del sistema que permitieron llegar al uso de la política social como instrumento de

control de la participación: 1. la política de masas de los gobiernos posrevolucionarios, 2. el presidencialismo, y 3. el partido “oficial”.

Partido “oficial”

Por tanto, la visión de los gobiernos mexicanos de combatir la pobreza como obligación del Estado para asegurar mínimos de bienestar, se proyecta también al considerar que entre los fines de la asistencia, debía estar la prevención de la aparición de la debilidad social o económica; se avanzaba pues, en la idea de que justicia social comprendía el derecho de todo ser humano a ser asistido, cuando carece de lo necesario para vivir (Guadarrama, 2001; 110); Podemos vislumbrar entonces la visión de justicia social, asociada al carácter tutelar que toma el Estado y lo transmite en sus diversos órganos ideológicos, tal es el caso del partido “oficial” que retoma estas palabras como parte de su estandarte para con la sociedad.

De tal forma, la política social mexicana se traduce en la concentración de instituciones y recursos para la atención de los grupos vinculados al partido hegemónico y al gobierno; con esto el aparato burocrático central⁵, se expande considerablemente provocando el aumento del gasto público, siendo un factor también bastante considerable, el gasto corriente destinado al pago de la velozmente creciente burocracia mexicana.

En este mismo tenor, la redistribución del ingreso se hace cada vez más ineficiente, puesto que los programas sociales se desagregan en diversas dependencias y el presupuesto es mucho más reducido, por ello, la seguridad social se erige como la pieza más fuerte de la política social, en función de que es la que crea programas y servicios universales⁶, en tanto que la asistencia como tal, se empezó a concentrar en las capas sociales más pobres, propiciando una falta de visión integral del problema y por ende con resultados poco tangibles.

Presidencialismo

Continuando con los factores y elementos del sistema político mexicano que además de contribuir a los procesos institucionales de formalización del poder y ejercicio cotidiano del mismo, representan

⁵ La propia burocracia del partido “oficial” crece exponencialmente, llegando en ocasiones a no hacer una diferencia clara para la población entre la estructura partidista y la estructura gubernamental.

⁶ A saber, desde la década de los ochenta primordialmente, comenzó la llamada focalización de los programas sociales, pero conservando muchos rasgos de la forma de cooptación de sistema, como el intercambio de un apoyo social a cambio de la credencial de elector.

en su relación con la sociedad, un punto de enlace para contribuir al diseño de las características del ciudadano y de la forma en la que se asocia y participa en la vida pública, que le darán funcionalidad con respecto al Estado, permitiendo de esta manera una relación estrechamente ligada, pero claramente diferenciada. Así, la clase política obtiene el respaldo social para llevar a cabo acciones que le permiten mantener y acrecentar el ejercicio del poder.

Es en este sentido el presidencialismo, uno de los elementos del sistema que claramente determina la relación entre el Estado y la Ciudadanía, así como uno de los factores predominantes que contribuye a construir tipos de participación con características específicas que le ofrece a la clase política dominante un ingrediente de respaldo y legitimidad⁷.

La figura presidencial en un régimen político y un sistema de gobierno como el mexicano, es indudablemente una pieza clave para el adecuado funcionamiento institucional, sin embargo, muchos analistas han coincidido en la excesiva concentración de facultades y prerrogativas del Presidente, manifestando que dicha posición ha degenerado en prebendas, canonjías y favoritismos a ciertos grupos políticos y sociales, lo que ha ayudado a tener una sociedad con tan alto grado de desigualdad de oportunidades, al tiempo que impide un equilibrado desarrollo de las potencialidades sociales.

“Durante el siglo XX en México el Presidencialismo constituyó una de las características más importantes del sistema político. En el periodo inmediato a la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, el ejecutivo se fortaleció paulatinamente a través de diversas reformas legales, así como de facultades que ejercía de facto; lo que se debió en gran parte al diseño de una estructura vertical en el que la figura presidencial se convirtió en el vértice al subordinar y ejercer su control respecto de los diversos actores políticos de la vida nacional.” (Patiño, www.derecho.unam.mx; 419).

De esta manera, con todo el respaldo jurídico-institucional la figura presidencial logró prevalecer sobre los demás elementos del sistema, e imponer su visión casi de forma total a los actores políticos; y en específico con los ciudadanos se marcó una distancia tal, que prácticamente aparecía como una figura inalcanzable. Pero como gran organizador de la vida política y administrativa del país, se lograron construir consensos con las cúpulas políticas y empresariales que dotaron de estabilidad y cierto desarrollo social; sin embargo, en relación con la ciudadanía, se estableció una

⁷ Un ejemplo de esto, son los grandes mítines realizados en plazas públicas a lo largo de todo el territorio nacional.

línea clara, donde el presidente en turno el gran tomador de las decisiones más importantes para la vida nacional.

“La consolidación del sistema presidencial mexicano forma parte de un proceso de centralización de facultades a cargo del ejecutivo federal, las cuales le permitieron ejercer control sobre los actores políticos y sociales... Si bien desde que México tuvo su primera constitución se adoptó el presidencialismo, no fue sino hasta la Constitución de 1917 cuando se le dio mayor fuerza dotándolo de mayores facultades y sobre todo en los ámbitos laboral y agrario, mismas que le permitieron a Cárdenas controlar a esos sectores y consolidar la institución presidencial como la principal figura nacional, sin salirse de los cauces legales.” (Patiño, www.derecho.unam.mx; 431).

El gran poder sobre todo el sistema político y sobre la sociedad misma del presidencialismo, establece dentro de la colectividad que el autoritarismo y el inexistente debate público de los asuntos nacionales, sean punto de partida para el ejercicio de una ciudadanía. Consolidando así, a un ciudadano que percibe la influencia presidencial en prácticamente todos los ámbitos de su vida. *“Cuando en México se consolidó finalmente el presidencialismo, no transcurrió mucho tiempo antes de que se asociara con la tiranía y la antidemocracia. Sin embargo, no hay ningún indicio de que la sociedad mexicana esté dispuesta a intentar la alternativa: el parlamentarismo.”* (Meyer, www.istor.cide.edu; 41-42).

Política de Masas

Por su parte, en lo que toca a la política de masas, esta se inaugura con el presidente Lázaro Cárdenas, quien estaba convencido de que había que contar con el apoyo de las clases populares (campesinos y obreros), organizadas bajo el mando estatal. La disciplina de masas controlada por el Estado encaminaría las fuerzas económicas hacia la más completa solución de las necesidades nacionales. Los aspectos fundamentales de la política de masas son: el reparto agrario, la organización del movimiento obrero y la educación socialista. Las masas se convirtieron en un agente político, un elemento activo al servicio de la Revolución.

La política de masas busca fortalecer al Estado, mediante la organización y unificación de las masas bajo la dirección del Estado, esto es un factor que permite fortalecer el Presidencialismo. Sus actores principales fueron: los obreros y los campesinos. *“...Cárdenas, en efecto, pensaba que... el liderazgo personal debía terminar y ser sustituido por otro, sin cambiar su esencia, que radicaba*

en el arbitraje político entre los diferentes intereses. Con el tiempo llegó a la conclusión de que la única forma de reemplazar el poder personal era convertirlo en poder institucional... concluyó que ese liderazgo sólo lo podría proporcionar el presidente de la república, por su investidura y no por sus cualidades personales, pero para que no se perpetuara en el poder debía abandonarlo junto con su cargo como titular del poder ejecutivo". (Córdova, 2014; 13-14).

Como parte de esta política de masas y con el apoyo fundamental de los campesinos, el presidente Cárdenas fortaleció a uno de los grupos que brindaría un apoyo trascendental al régimen revolucionario por largas décadas, es así como el reparto agrario fue una medida económica y social fundamental del cardenismo, y la que en cierto modo constituyó su centro de gravedad histórico. Dando tierra organizaba a este sector.

Conclusiones

Como puede observarse, el sistema político mexicano a través de su historia ha construido diversas maneras para asegurar un fuerte control de la población, y con ello, una aparente estabilidad política que le permita continuar con el ejercicio del poder público.

En este sentido, los factores que se toman en consideración para evidenciar el control que ejerce el Estado sobre la participación de los ciudadanos, con especial énfasis en la política social, es la primera parte de un trabajo más extenso, que pretende abarcar todos los periodos sexenales hasta el año 2000. Como construcción histórica del siglo XX, donde se encuentran los referentes que determinaron la construcción de un tipo específico de ciudadano y de sus formas de participación.

Los principales elementos destacados en esta parte del trabajo para la construcción de un tipo de ciudadanía tutelada por el Estado y a su vez, su relación directa con el poder político son además de la política social, como factor principal: la política de masas, el partido oficial y el presidencialismo. Elementos, que imbricados, constituyen una especial forma de delinear la manera en que ha de conjugarse la actuación de un ciudadano dentro del espacio público y su forma de participar individual o asociativamente.

Es así, que es plausible observar cómo los esquemas paternalistas de un Estado Interventor, delinean verticalmente los espacios que se les han de permitir a los ciudadanos para dar salida a sus demandas o inquietudes, relegando casi totalmente su participación al ámbito electoral, como se

mencionó en reiteradas ocasiones durante este trabajo. Asimismo, aunque dicho Estado Interventor sufre una reestructuración, generando su adelgazamiento, no deja de lado los esquemas tutelares que provocan clientelismo y prácticas corporativas.

Bibliografía

ANDER, Egg Ezequiel (1990) América Latina y los desafíos de la política social. Editorial Humanitas, Buenos Aires.

BOLIVAR, Espinoza Augusto. (1996) En torno al Estado como promotor del bienestar social. En Rodolfo García Zamora (et. al.) Funciones del Estado en el desarrollo económico y social. Universidad Autónoma de Juárez/Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

CÓRDOVA, Arnaldo. (2014) Lázaro Cárdenas: la institucionalización del liderazgo de masas. En *De Política*. Revista de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas/Año 2 núm. 2, enero-junio de 2014, México.

GUADARRAMA, Gloria (2001) Entre la caridad y el derecho. Un estudio sobre el agotamiento del modelo nacional de asistencia social. El Colegio Mexiquense, México.

Ley General de Desarrollo Social. [http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/182/12.htm?s=\(5/09/2015\)](http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/182/12.htm?s=(5/09/2015))

MERINO, Mauricio. (1995) La participación ciudadana en la democracia. En *Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática*. IFE; México.

MEYER, Lorenzo. El presidencialismo mexicano en busca del justo medio www.istor.cide.edu/archivos/num_3/dossier3.pdf (30/06/2015)

PATÍÑO, Manffer Ruperto. La consolidación de la institución presidencial durante el período revolucionario. www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/.../14DrPATINO.pdf (30/06/2015)

PINEDA, Pablos Nicolás. (1999) Tres conceptos de ciudadanía para el desarrollo de México. En *Este País* número 34, México.

SOBRINO, Jaime y GARROCHO, Carlos. (1995) Pobreza, política social y participación ciudadana. EL Colegio Mexiquense, México.

TEJERA, Gaona Héctor (2006) Cultura ciudadana, gobiernos locales y partidos políticos. En *Sociológica*, Año 21 No. 61 UAM-I México.

VILLAREAL, Martínez María Teresa. Participación ciudadana y políticas públicas. http://www.cee-nl.org.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarrealMartinez.pdf terevima@yahoo.com (5/09/2015)